



Poder Judicial de la Nación

JUZGADO PENAL ECONOMICO 5

CPE 626/2023

///nos Aires, 18 de diciembre de 2025.

AUTOS Y VISTOS:

Para resolver en la presente causa **CPE N° 626/2023**, caratulada **"C., C. E. s/ Av. de Delito"**, del registro del Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 5, a mi cargo, Secretaría N° 10, respecto de la situación procesal de **C.E.C.**, titular del Documento Nacional de Identidad N° ***, de nacionalidad argentina, de estado civil ***, nacida el *** en la ciudad de ***, de la provincia de ***, hija de J.T.R. (f) y de D.C. (v), desempleada, con estudio secundario incompleto, con domicilio real en ***, electrónico constituido conjuntamente con sus letrados codefensores C.N.B. y G.M.C. en las C.U.I.T. N° **-*****-* y N° **-*****-* respectivamente, y procesal en la calle XXXXX N° **** de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;

Y CONSIDERANDO:

I.- ANTECEDENTES DE LA CAUSA.

1.- Las presentes actuaciones se iniciaron con motivo del procedimiento efectuado el día 9 de julio de 2023 por personal de la Unidad Operacional de Seguridad Preventiva Metropolitana de la Policía de Seguridad Aeroportuaria en el Punto de Inspección y Registro (P.I.R.) -denominado "Preembarque Nacional"-, sito en el primer piso del Aeroparque Metropolitano Jorge Newberry de esta ciudad.

En dicha ocasión, personal preventor pudo visualizar que una persona de género femenino había depositado sus pertenencias en la cinta transportadora de la máquina de rayos "X" N° 4, observándose en la imagen aportada por el medio técnico que en el interior de una mochila de medianas dimensiones con vivos floreados eran habidos elementos que por su forma, color y densidad podrían tratarse de billetes. En dichas circunstancias se identificó a la pasajera quien resultó ser y llamarse **C.E.C.**, titular del Documento Nacional de Identidad N° ***.

Al ser consultada sobre si llevaba dinero en efectivo, contestó de modo afirmativo, por la cantidad de cuatro mil quinientos dólares estadounidenses (U\$S 4.500) y setecientos mil pesos (\$700.000). Luego, al ser preguntada sobre si tenía documentación que acredite la procedencia del dinero, y si el mismo era de curso legal, la nombrada le



manifestó al personal actuante que no podía justificare su procedencia pero que era dinero de su propiedad y que lo iba a utilizar para comprar en la feria "La Salada". Posteriormente, el personal preventor realizó una requisa sobre la totalidad del equipaje de mano transportado por la pasajera, en el cual luego del conteo del dinero en efectivo, arrojó que la misma llevaba un total de un millón setenta y un mil setecientos ochenta pesos argentinos (\$ 1.071.780) y diecisiete mil cincuenta dólares estadounidenses (U\$S 17.050).

Al respecto, se hizo saber que C.E.C. habría manifestado nuevamente y de manera espontánea que si bien había faltado a la verdad, ese dinero era suyo, que venía a realizar una compra en la feria, pero que no pudo realizarla porque le habían avisado que su hijo se encontraba enfermo, entonces decidió volver en avión. Al ser consultada sobre cuando llegó a Buenos Aires, la misma manifestó que lo hizo el día sábado 8 de julio de 2023, en micro y que pasó la noche en la feria.

Así las cosas se procedió al secuestro de los valores indicados y del teléfono celular de la causante -marca Samsung, modelo Galaxy A12, color azul, con una tarjeta SIM con la inscripción "PERSONAL" N° ***, sin tarjeta de memoria-, sin perjuicio de lo cual se le restituyó la suma de \$ 71.780, a los fines de evitar que la causante quede en situación de desamparo, pueda movilizarse y llegar a su hogar (ver Prevención Sumaria N° 0540AER/2023).

2.- Recibidas las presentes actuaciones digitalmente en este tribunal, se ordenó la anotación definitiva de la prohibición de salida dispuesta respecto de C.E.C., como así también la remisión de los dólares secuestrados a la nombrada (U\$S 17.050) a la Gerencia de Fiscalización de Actividades no Autorizadas del Banco Central de la República Argentina, a fin que proceda a su desintervención, toma fotográfica de los números de serie y denominación de los billetes en cuestión, y adopte las medidas necesarias a fin de determinar si dichas divisas son auténticas.

Asimismo, se requirió el depósito de los pesos argentinos incautados a C.E.C. (\$1.000.000) bajo la modalidad de plazo fijo a nombre de este tribunal y causa en el Banco de la Nación Argentina -sucursal Tribunales- (ver decreto de fecha 11 de julio de 2023, constancia y nota actuarial de fecha 14 de julio de 2023 y oficios





Poder Judicial de la Nación

JUZGADO PENAL ECONOMICO 5

CPE 626/2023

electrónicos N° 10495201 y 10500231 del Banco de la Nación Argentina, incorporados con fecha 24 de julio de 2023).

Por último, se dispuso delegar la dirección de la investigación en el Ministerio Público Fiscal en los términos del artículo 196 del Código Procesal Penal de la Nación.

Tras la producción de una serie de medidas de prueba, el Ministerio Público Fiscal solicitó a este juzgado que se le reciba declaración indagatoria a C.E.C. en los términos del artículo 294 del Código Procesal Penal de la Nación, en orden al delito previsto en el artículo 303 del Código Penal "...conforme su redacción actual [-t.o. según Ley N° 27.739 publicada en el Boletín Oficial de la República Argentina del 15 de marzo de 2024-]" (ver dictamen fiscal de fecha 5 de agosto de 2024).

II.- HECHO IMPUTADO Y CALIFICACIÓN LEGAL.

3.- En virtud de lo solicitado por el Ministerio Público Fiscal, C.E.C. fue convocada a prestar declaración indagatoria, ocasión en la que se le imputó el hecho consistente en *"... haber intentado poner en circulación en el mercado bienes provenientes de un ilícito penal, en concreto y cuanto menos, la suma de un millón setenta y un mil setecientos ochenta pesos argentinos (\$ 1.071.780) y diecisiete mil cincuenta dólares estadounidenses (US\$ 17.050) que transportaba la compareciente el día 9 de julio de 2023, en horas de la tarde, cuando se disponía a embarcar en el vuelo de la empresa aerocomercial Jet Smart N° WJ 3664, con destino a la ciudad de Jujuy, acondicionada en el interior de una mochila que llevaba como equipaje de mano; ello, con la consecuente posibilidad de que el dinero transportado adquiriese la apariencia de origen lícito. Tal suceso fue advertido el día 9 de julio de 2023, oportunidad en la que personal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria que se encontraba en la zona del Punto de Inspección y Registro (P.I.R.) -denominada internamente como Preembarque Nacional-, sito en el primer piso del Aeroparque Internacional Jorge Newbery de esta ciudad. En dicha ocasión, personal preventor pudo visualizar que una persona de género femenino había depositado sus pertenencias en la cinta transportadora de la máquina de rayos 'X' N° 4, observándose en la imagen aportada por el medio técnico que en el interior de una mochila de medianas dimensiones con vivos floreados*



*eran habidos elementos que por su forma, color y densidad podrían tratarse de billetes. En dichas circunstancias se identificó a la pasajera quien resultó ser y llamarse C.E.C., titular del Documento Nacional de Identidad N° ***. Al ser consultada sobre si llevaba dinero en efectivo, contestó de modo afirmativo, por la cantidad de cuatro mil quinientos dólares estadounidenses (US\$ 4.500) y setecientos mil pesos (\$700.000). Luego, al ser preguntada sobre si tenía documentación que acredite la procedencia del dinero, y si el mismo era de curso legal, la nombrada le manifestó al personal actuante que no podía justificar su procedencia pero que era dinero de su propiedad y que lo iba a utilizar para comprar en la feria 'La Salada'. Posteriormente, el personal preventor realizó una requisa sobre la totalidad del equipaje de mano transportado por la pasajera, en el cual luego del conteo del dinero en efectivo, arrojó que la misma llevaba un total de un millón setenta y un mil setecientos ochenta pesos argentinos (\$ 1.071.780) y diecisiete mil cincuenta dólares estadounidenses (US\$ 17.050)".*

El suceso descripto fue circunscripto por el Ministerio Público Fiscal en la tenencia de las sumas dinerarias antes enunciadas, *"...de origen presuntamente ilícito, con el fin de aplicarlos en algún tipo de operación tendiente a darle apariencia de lícito; hecho este subsumible 'prima facie', en las previsiones del art. 303 del CP, conforme su redacción actual".*

III.- DESCARGO OFRECIDO POR LA IMPUTADA.

4.- Al momento de prestar declaración indagatoria, C.E.C. manifestó que se remitía íntegramente a la presentación efectuada por su defensa técnica mediante el Sistema de Gestión Judicial LEX 100 con fecha 25 de junio de 2025.

En aquella presentación, se indicó que el dinero que se le secuestró a la nombrada, oriunda de la provincia de Jujuy, *"...le fue entregado por personas de su confianza con las que trabaja desde hace muchos años y con la finalidad de encargar la compra de indumentaria en la feria de dicha provincia".*

Respecto del contenido del teléfono celular incautado en ocasión del procedimiento inicial, la defensa remarcó que aquellos elementos extraídos del dispositivo *"...demuestran sin lugar a hesitación*

que se dedica de manera legal a la compra y venta de indumentaria,





Poder Judicial de la Nación

JUZGADO PENAL ECONOMICO 5

CPE 626/2023

tales como imágenes de ropa para personas mayores como para menores, como así también facturas de productos pertenecientes a locales mayoristas que realizan ventas a los mencionados para vender, es decir realizan compras al por mayor y venden de manera minorista".

Así también la defensa señaló que *"...a lo largo del expediente se encuentran un sinnúmero de fotos extraídas del teléfono peritado, de zapatillas varias de modelos indistintos, camperas también varias de modelos distintos, camisas, fotos varias de medias, chalecos y por supuesto tantas otras fotos de distintos productos de indumentaria relacionados a la actividad comercial que realiza la imputada de manera legítima".*

Particularmente, hizo referencia a una conversación reseñada en el informe efectuado por la Unidad Operacional Control del Narcotráfico y Delito Complejo Policía de Seguridad Aeroportuaria entre C.E.C. y un contacto agendado como "XXXX" en el dispositivo celular secuestrado, en la que se trataron temas de índole comercial vinculados a las ventas, porcentajes de las mismas y compra de suministros (como bolsas de regalo), como así también se compartieron imágenes de cálculos, de una factura de ropa, *"...extremos que acreditan una vez más la inexistencia del delito reprochado y del actuar negligente por parte de la policía de intervención"* y que *"Dicha experticia menciona que 'XXXX' es quien compró el pasaje de la imputada de regreso a Jujuy para el 09/07/23 a las 17.02 hs. desde el Aeropuerto Jorge Newbery hacia el Aeropuerto Horacio Guzmán de Jujuy"*.

En ese andarivel, la defensa de C.E.C. puso de resalto que en el informe de la Unidad Operacional Control del Narcotráfico y Delito Complejo *"...SE NIEGA CATEGÓRICAMENTE que el dinero tuviera origen ilícito o que la conducta de la imputada tuviera la finalidad de ocultar o legitimar activos provenientes de delito alguno"* (el destacado pertenece al original).

Con relación a las condiciones de vida de la imputada, la defensa remarcó que C.E.C. *"...es una mujer de bajos recursos, madre de familia, sin antecedentes penales, que se desempeña en actividades informales de compraventa para subsistir, y como es dable observar en los distintos oficios ordenados por la instrucción dirigidos a bancos,*



agencias de viajes, casas de cambio, migraciones y fundamentalmente a la (ex AFIP) hoy ARCA para que informe de su base informática E-FISCO la situación patrimonial, económica y financiera, debiéndose señalar que la respuesta del Fisco Nacional mediante el informe embebido, surge claramente que la imputada es una persona de muy bajos recursos, que no posee casa ni automóvil, tampoco cuentas bancarias ni tarjetas de crédito".

Específicamente respecto del dinero incautado, la defensa señaló que aquel fue entregado "...para adquirir ropa en la feria de la ciudad de Jujuy, encargo por el cual recibiría una pequeña comisión, en un contexto de una economía informal, pero de ninguna manera sujeto a maniobras delictivas".

Con relación a la imputación formulada (artículo 303 del Código Penal), los abogados defensores indicaron que la "mera portación de sumas de dinero" no alcanza para configurar el tipo penal bajo análisis y que "El hallazgo de imágenes y conversaciones comerciales no hace sino confirmar que el dinero tenía el destino declarado".

Así también, expresaron que "...criminalizar actividades típicas de la economía informal (ferias, ventas populares, intermediación comercial) en ausencia de prueba objetiva del origen delictivo de los fondos implica una violación al derecho de defensa y al de ejercer industria lícita (el comercio), consagrados en los arts. 18 y 19 de la CN y en la Convención Americana sobre Derechos Humanos (arts. 8 y 25)".

La defensa enumeró las circunstancias que -a su criterio- corresponden refutar respecto del dictamen fiscal por el cual se solicitó se reciba declaración indagatoria a C.E.C. y solicitó la restitución inmediata de las sumas de dinero y del teléfono celular que le fueran incautados en el procedimiento inicial de fecha 9 de julio de 2023.

*Finalmente, se ofreció prueba de descargo (declaraciones testimoniales, informes y prueba pericial) y se aportó -junto con la citada presentación- declaraciones juradas correspondientes al ejercicio fiscal 2022 y 2023 y resumen de movimientos y de cuentas bancarias de *** quien según la defensa técnica, fue la persona que le habría entregado el dinero en efectivo a C.E.C..*





Poder Judicial de la Nación

JUZGADO PENAL ECONOMICO 5

CPE 626/2023

5.- Posteriormente, con fecha 31 de octubre de 2025, la defensa de C.E.C. realizó una nueva presentación en la bandeja de escritos digitales del Sistema de Gestión Judicial LEX 100, a través de la cual solicitó se dicte el sobreseimiento de la nombrada en los presentes actuados *"...por cuanto los hechos que se le atribuyen no constituyen delito alguno y no existe elemento de convicción necesario que permita sostener la tipicidad ni la antijuridicidad del accionar investigado"*.

Para así entenderlo, la defensa de C.E.C. indicó que en el caso no concurren ninguno de los elementos del tipo penal endilgado -lavado de activos, previsto en el artículo 303 del Código Penal-. En ese sentido, remarcó que *"No existe prueba alguna que permita siquiera inferir la existencia de un 'delito precedente', ni mucho menos el conocimiento por parte de mi asistida"*.

Alegó que el transporte del dinero en sí mismo -incluso en sumas importantes- no configura ilícito penal alguno, como así tampoco *"...puede presumirse que dicho dinero provenga de actividades delictivas"*.

Señaló asimismo que su defendida no realizó actos de ocultamiento, disimulación ni inserción de activos de origen delictivo, y que el dinero a ella secuestrado *"...provenía de una operación comercial lícita, debidamente acreditada con la documentación aportada por los Sres. *** y ***, quienes incluso respaldaron el origen legal de los dólares mediante comprobantes de compra MEP y declaraciones juradas fiscales"*.

Tras ello, la defensa de C.E.C. puso de resalto que la modificación que introdujo la sanción de la Ley N° 27.739 al tipo penal bajo estudio (B.O. 15 de marzo de 2024), mutó sustancialmente el modo en el cual se determina la condición objetiva de punibilidad del inciso 1° del artículo 303 del Código Penal.

Luego de rememorar que la redacción actual de dicha norma prevé -como condición objetiva de punibilidad- que el monto objeto del delito supere la suma de 150 Salarios Mínimos, Vitales y Móviles al momento de los hechos, la defensa sostuvo que *"A fin de realizar el cálculo que fija la condición objetiva de punibilidad para tener por configurado el delito de lavado de activos, se deben*



multiplicar \$ 105.500 (SMVyM al 09/09/2023) por 150, arrojando la cifra de \$ 15.825.000. Del valor del dinero en moneda extranjera cuyo lavado se le imputa a la Sra. C.E.C. (USD 17.050 a la cotización comprador del Banco Nación de \$ 260 = \$ 4.433.000) más los \$ 1.071.780 que se le secuestraran como objeto del delito enrostrado, se obtiene el monto de \$ 5.504.780".

Por lo expuesto, indicó la defensa que dicho valor se encuentra \$10.320.220 por debajo del monto de la condición objetiva de punibilidad determinada en la norma antes citada y sobre esa base, solicitó el sobreseimiento de su asistido.

Por último, refirió que *"La evidencia colectada demuestra que no existe delito precedente; no hubo actos de conversión, transferencia ni disimulación; no se verificó dolo específico ni conciencia del origen ilícito; el dinero y las conversaciones halladas se corresponden con una actividad comercial lícita; la imputada carece de antecedentes y vínculos con el delito organizado. En consecuencia, y conforme al art. 336 del C.P.P.N., corresponde dictar el sobreseimiento total y definitivo de la Sra. C.E.C., toda vez que el hecho atribuido no constituye delito ni existe posibilidad razonable de subsistencia de la acción penal"*.

IV.- DE LAS PRUEBAS INCORPORADAS.

6.- Establecido cuanto precede, se advierte que en el marco de esta pesquisa, la Fiscalía actuante solicitó en primer lugar el levantamiento del secreto bancario, financiero, bursátil y fiscal respecto de C.E.C. y la toma de contenido del teléfono celular marca Samsung, modelo A12, secuestrado a C.E.C. en el procedimiento que diera origen a estas actuaciones, conforme lo normado en el artículo 236 del Código Procesal Penal de la Nación, medidas que fueron autorizadas por este Juzgado (cfr. auto y resolución de fecha 14 de julio de 2023, y auto de fecha 4 de agosto de 2023 -particularmente punto VII-).

Así las cosas, con fecha 24 de julio de 2023 la Unidad Operacional de Seguridad Preventiva de la Policía de Seguridad Aeroportuaria remitió -en formato papel- el informe N° 696CReV/2023 de análisis de video del DVD 491COCAER/2023 labrado por el Centro Regional de Video Vigilancia CReV I de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, respecto de los registros filmicos del Centro Operativo de





Poder Judicial de la Nación

JUZGADO PENAL ECONOMICO 5

CPE 626/2023

Control del Aeroparque Jorge Newbery del día 9 de julio de 2023, es decir, la fecha y lugar en los que se llevó a cabo el procedimiento que originara estas actuaciones.

En aquel informe, la fuerza actuante señaló que *"...siendo las 15:47hs, del día 09 de julio del año en curso, se visualiza a la Sra. C.E.C. en la pérgola del Aeroparque Jorge Newbery. Acto seguido se la observa transitar por el Hall de partidas y patio de comidas. Seguidamente siendo las 16:11hrs la nombrada realiza el Check In de la compañía JET SMART, del vuelo WJ 3664, luego de varios minutos se dirige hacia el Punto de Inspección y Registro sito en la planta alta de la terminal aérea, donde realiza el control policial, depositando sus pertenencias en la maquina de rayos 'X', para luego traspasar el arco detector de metales, a continuación se visualiza a personal policial de esta fuerza de seguridad realiza un chequeo exhaustivo sobre las pertenencias de la Sra. C.E.C., minutos más tarde es trasladada junto a todo el personal interviniente hacia el Turno de Prevención".* Se acompañaron en dicho informe tomas de pantalla de las filmaciones analizadas, identificadas por hora y sector del aeropuerto correspondientes (ver nota de fs. 115).

Respecto de las divisas secuestradas, el Banco Central de la República Argentina informó oportunamente que *"...realizada la pericia correspondiente sobre los USD 17.050...presentados se determinó que todos ellos son LEGÍTIMOS"* (el destacado es del original; cfr. oficio electrónico N° 10659477 incorporado el 10 de agosto de 2023).

7.- Con relación a la desintervención del teléfono celular marca Samsung, modelo A12, secuestrado a C.E.C., cabe referir en primer término que, con fecha 11 de septiembre de 2023, la defensa de la nombrada aportó el patrón de seguridad para el desbloqueo del aparato móvil.

Posteriormente, con fecha 15 de diciembre de 2023, la Policía de Seguridad Aeroportuaria -designada por el Ministerio Público Fiscal para realizar dicha labor pericial- elaboró el informe N° 211_AER/2023, que almacenó en 6 soportes ópticos (DVD) que fueron remitidos -para su análisis- a la Unidad Operacional de Seguridad Preventiva Metropolitana de la citada fuerza federal.



A raíz de la labor encomendada, dicha unidad elaboró, con fecha 15 de julio de 2024, un informe analítico basado en los datos obtenidos en la extracción del contenido del celular secuestrado a C.E.C.. En aquél se destacó en primer término que en la carpeta "Imágenes" del dispositivo móvil peritado se registraban 103.880 archivos y que en ellos *"...se visualiza documentos manuscritos, los cuales se encuentran relacionados con la compra/venta, de distintos tipos de prendas, tales así como, buzos, calzados, etc., asimismo se logró identificar bolsas que contienen medias y distintos tipos de vestimenta..."*. Adjuntan en dicho informe una serie de imágenes de relevancia para la fuerza a cargo de la pericia.

Posteriormente y respecto de la carpeta "Sonido", la fuerza interviniente señaló que existían 23.470 archivos. Respecto de estos, la Policía de Seguridad Aeroportuaria indicó que *"...se oyeron y analizaron distintos tipos de audios, correspondientes a la aplicación de mensajería conocida como WhatsApp, los cuales contienen datos relacionados al viaje realizado por la sindicada C.E.C., en donde la misma habla sobre su viaje a la Provincia de Buenos Aires y el fin del mismo, posteriormente a un minucioso análisis, se confirmó que misma realiza su viaje, con el fin de realizar la compra de indumentaria"*.

Tras remarcar que los archivos de video contenidos en el dispositivo peritado eran *"irrelevantes para la presente causa"*, la fuerza interviniente resaltó que en la carpeta "Mensajes" se identificaron 1.611 archivos de ese tipo, respecto de los cuales *"...se han encontrado conversaciones entre la sindicada en autos C.E.C. y distintas personas, en las cuales, la misma indicaba que se encontraba en viaje o mismo ya en Buenos Aires, a la espera de que le preparen mercadería, haciendo referencia a distintos tipos de prendas, como asimismo informando el valor de distintos tipos de productos, y el porcentaje posterior para su reventa"*.

En este punto, la Unidad a cargo del análisis del contenido del dispositivo electrónico destacó particularmente algunas de las conversaciones mantenidas entre C.E.C. y sus contactos. Entre ellas, en primer lugar, mencionan un chat entre la imputada y un contacto "***", del que reseñaron que *"...se aprecia un audio recibido por parte del contacto '***', el cual le pregunta a la sindicada en autos C.E.C., si al*





Poder Judicial de la Nación

JUZGADO PENAL ECONOMICO 5

CPE 626/2023

*día siguiente iba a dirigirse a retirar los pantalones, posteriormente la investigada en autos le responde, que, al día de la fecha, siendo ese el día 09/07/2023, se estaba volviendo en avión y que, al día siguiente, ya iba a ir a retirar los pantalones. Es menester mencionar que dicho contacto, es perteneciente a Bolivia, siendo este el siguiente número de abonado: ***, por tal motivo no se pudo realizar compulsa de dicho abonado, por medio del Ente Nacional de Comunicaciones (ENCACOM)..." (el destacado es del original).*

*También citaron una conversación con un contacto de nombre "XXXX" (línea telefónica N° ***), en la cual "...ambas hablan sobre un local de venta, también suelen hablar sobre el porcentaje de las ventas y suministros como bolsas de regalo, también en las presentes comunicaciones suelen compartirse imágenes de cálculos realizados, como asimismo se logró apreciar una factura, la misma perteneciente a un puesto de ropa, asimismo XXXX, sería quien le realizó la compra del pasaje de regreso a su Jujuy, para el día domingo 09 de julio del año 2023 a las 17:02 hs, desde el aeropuerto internacional Jorge Newbery, hacia el aeropuerto Gobernador Horacio Guzmán Jujuy. Es menester mencionar que se compulsó por medio de la plataforma de billetera virtual, denominado Mercado Pago, el número de abonado, el mismo está asociado a G.R.T..." (el destacado es del original).*

Respecto de ambas conversaciones, el Equipo 7 de Investigaciones de la Unidad Operacional antes citada acompañó las capturas de pantalla pertinentes.

V.- MATERIALIDAD Y PARTICIPACIÓN.

8.- Establecido cuanto precede e ingresando al escrutinio del hecho pesquisado y la respectiva intervención achacada a C.E.C. en aquél, de manera liminar cabe mencionar que tales extremos no han sido controvertidos por la defensa de la encausada sino que los descargos oportunamente formulados están encaminados a discutir por un lado el presunto carácter ilícito de las sumas de dinero que portaba la nombrada al momento del procedimiento que diera origen a estos actuados y, por otra parte, la atipicidad de la conducta reprochada por no superar aquella la condición objetiva de punibilidad prevista en el artículo 303, inciso 1°, del Código Penal -t.o. según Ley N° 27.739-.



Aclarado ello, de la evaluación del plexo cargoso reunido en autos se aprecia que respecto del objeto procesal de la presente causa han sido acreditados -con los estándares requeridos para esta etapa del proceso- una serie de extremos que conforme se desarrollará, conllevan a tener por corroborada la materialidad objeto de pesquisa y la participación de la encausada C.E.C. en aquella.

En concreto y conforme se desarrolla seguidamente, a tenor de las circunstancias de tiempo, modo y lugar corroboradas a partir de la probanza reunida en autos, a criterio de esta judicatura se encuentra acreditado con el grado de certeza exigida en esta etapa procesal que el dinero en efectivo que llevaba consigo la encausada el pasado 9 de julio de 2023 es de origen ilícito, máxime frente a la falta de comprobantes que justificaran el traslado físico de que las sumas de dinero involucradas, esto es, fuera del circuito financiero.

Así también, de las pruebas recolectadas y de la investigación desplegada, no se ha corroborado que la actividad desarrollada por parte de la imputada (compra venta de prendas y calzado en ferias) tenga entidad suficiente para justificar la tenencia y el traslado del dinero objeto de autos, a pesar del esfuerzo argumental de la defensa de la acusada por intentar comprobar el origen lícito de los valores en cuestión, a lo que también se hará mención *infra*.

9.- Para arribar a esta conclusión, cabe referir primeramente que en el caso *sub examine*, en atención a la cantidad de dinero en efectivo que C.E.C. trasladaba consigo (\$ 1.071.780 y U\$S 17.050) y la circunstancias de no haber declarado aquellas sumas, como así también las contradicciones en las que incurrió la nombrada durante el procedimiento practicado, permiten estimar que el origen de las mismas no sería lícito.

A su vez, no escapa al suscripto que en un primer momento (el día en el que se llevó a cabo el procedimiento), C.E.C. señaló que era dinero suyo para comprar en la feria "La Salada" de Buenos Aires, luego de lo cual manifestó -mediante el descargo presentado en oportunidad de prestar declaración indagatoria- que aquellos montos le fueron entregados por terceras personas a fin de que adquiriera indumentaria en la feria de la provincia de Jujuy.





Poder Judicial de la Nación

JUZGADO PENAL ECONOMICO 5

CPE 626/2023

En efecto, de las constancias incorporadas en el expediente -y del propio descargo presentado- no surge que C.E.C. tuviera los medios necesarios para generar una riqueza acorde con el dinero incautado. Justamente, en su descargo, la defensa de la nombrada señaló que aquellas sumas le fueron entregadas *"...por personas de su confianza con las que trabaja desde hace muchos años y con la finalidad de encargarse la compra de indumentaria en la feria de dicha provincia"*.

De tal manera, a partir de la información suministrada, si se tiene en cuenta que C.E.C. no cuenta con un trabajo registrado que le acredite algún tipo de ingreso y las inconsistencias que se advierten entre sus primeras manifestaciones durante el procedimiento de 2023 y el descargo presentado por su defensa en torno al origen y/o destino de las sumas de dinero que llevaba consigo la nombrada, no se evidencia una forma legítima a partir de la cual la imputada pudo haber generado la cantidad de dinero que portaba próxima a embarcarse al vuelo con destino a la provincia de Jujuy.

Por otra parte, de tener algún tipo de actividad lícita que le genere esa cantidad de ingresos, mínimamente debería ser titular de, al menos, una cuenta bancaria. En ese sentido, actualmente en su mayor medida el flujo financiero en el mercado comercial se opera de manera bancarizada. Esa circunstancia, sumada a la falta de actividades declaradas, acrecienta la hipótesis de que esas sumas de dinero sean espurias.

Si a lo expresado se agrega que las sumas incautadas estaban siendo transportadas en forma personal por C.E.C., y que la cantidad secuestrada no es de aquéllas que habitualmente, y por razones de seguridad, son transportadas en el modo en que la imputada intentó hacerlo (pues lo lógico es recurrir a medios más formales y seguros para el flujo de divisas), la forma en que aquel desplazamiento se realizó sólo resulta razonable en un contexto relacionado con el origen clandestino de los importes en cuestión, en el cual no es posible acudir a las vías de transferencia de divisas formales mediante la bancarización de los montos involucrados.

10.- Vale decir en este punto que ninguna de las conclusiones a las cuales se hizo mención anteriormente se controvierten por el descargo de la imputada.



En ese sentido, debe recordarse que en la presentación efectuada al momento de prestar declaración indagatoria, C.E.C. manifestó que se desempeñaba en actividades informales de compra-venta para subsistir, lo cual -sostuvo- se corrobora también por la información extraída del teléfono celular secuestrado a la nombrada el día del procedimiento. Según precisó la propia defensa, ello demostraría *"...sin lugar a hesitación que se dedica de manera legal a la compra y venta de indumentaria, tales como imágenes de ropa para personas mayores como para menores, como así también facturas de productos pertenecientes a locales mayoristas que realizan ventas a los mencionados para vender, es decir realizan compras al por mayor y venden de manera minorista"*.

Además, conforme ya se dijo, aclaró que el dinero que se le secuestró a la nombrada, oriunda de la provincia de Jujuy, *"...le fue entregado por personas de su confianza con las que trabaja desde hace muchos años y con la finalidad de encargarse de la compra de indumentaria en la feria de dicha provincia"*.

Por lo expuesto, la defensa de C.E.C. negó que el dinero tuviera origen ilícito o que la conducta de aquella tuviera como finalidad la de ocultar o legitimar activos *"provenientes de delito alguno"*. Al respecto que adjuntó también copias de la declaración jurada del Impuesto a las Ganancias para personas humanas -correspondiente a los ejercicios fiscales 2022 y 2023- y los resúmenes de movimientos de la cuenta N° *** del Banco XXXXXX S.A., relativas a V.C.A.

Ahora bien, con relación a los extremos referidos por la defensa de C.E.C., cabe referir que, tal como se adelantó, de manera alguna las expresiones volcadas en su descargo, como así tampoco la documental acompañada, conmueven el criterio que en este pronunciamiento se adopta. En rigor, lejos de criminalizar actividades lícitas de comercio, lo que se intenta corroborar en este tipo de pesquisas, es el origen del dinero en efectivo incautado.

En orden a ello y conforme se viene sosteniendo, ni las manifestaciones de C.E.C., ni las constancias arrimadas al expediente, como así tampoco la circunstancia que aquellas sumas fueran entregadas por dos personas de su confianza para comprar ropa en la provincia de Jujuy -siendo que se aportaron respecto de una de ellas, copias de las





Poder Judicial de la Nación

JUZGADO PENAL ECONOMICO 5

CPE 626/2023

últimas declaraciones juradas del Impuesto a las Ganancias previas al hecho que diera origen a esta causa- logran justificar el origen de los fondos secuestrados.

11.- En particular, cabe mencionar que, por sí solos, los movimientos de la cuenta N° *** del Banco XXXXXXXX S.A., vinculada a V.C.A., no acreditan el origen lícito del dinero que transportaba C.E.C. pues ningún otro elemento de prueba fue incorporado en estos actuados, que permita corroborar que los billetes secuestrados provenían efectivamente de las actividades a las que V.C.A. se dedicaría, y por las cuales tiene ingresos de dinero.

En ese sentido, resulta pertinente destacar -nuevamente- que las sumas secuestradas durante el procedimiento llevado a cabo el 9 de julio de 2023 eran detentadas en efectivo por parte de la encausa y, por tanto, respecto de aquellas se destaca su carácter fungible a efectos de verificar la identidad de las misma

Es así que la pretensa justificación esgrimida por la defensa de C.E.C. relativa a que el dinero secuestrado sería de origen lícito en tanto habría sido entregado a la nombrada por las terceras personas invocadas, no constituye una derivación necesaria de los extremos relatados en el descargo defensorista y las constancias arrimadas en apoyatura de aquellos.

En efecto, el planteo articulado por la defensa de C.E.C., aislado de otro elemento que concretamente la vincule con el mentado V.C.A. y V.N.A., solo evidencia que estos últimos contaban con capacidad económica declarada dentro del circuito bancario y fiscal para dar esas sumas, mas no demuestra la identidad entre aquellas y las que efectivamente portaba C.E.C. el pasado 9 de julio de 2023.

En este punto, cabe remarcar que de la compulsa del teléfono celular de C.E.C., no surgen contactos ni comunicaciones vinculadas a V.C.A. y V.N.A. y la alegada entrega del dinero que luego fuera secuestrado, es decir, elementos que permitan corroborar la hipótesis planteada por la defensa de la nombrada.

A lo dicho, se suman las inconsistencias ya advertidas entre las manifestaciones efectuadas por la encartada el día del hecho en lo referente al origen y destino de las sumas habidas y lo que luego se



narrara en el descargo defensorista durante la oportunidad prevista por el artículo 294 del Código Procesal Penal de la Nación.

De igual modo, se aprecia que manifestar que el dinero fue recibido de parte de un tercero a efectos de realizar una actividad comercial lícita, en un ámbito (como las ferias de ropa) en las que típicamente los pagos se realizan en efectivo, colabora con la hipótesis planteada por el acusador, por cuanto de esa manera es fácil y práctico poner en circulación dinero mal habido.

De este modo, ante la inexistencia de algún tipo de documento o constancia que permita atribuir la suma de dinero transportada por C.E.C. a aquella declarada por V.C.A., su licitud no puede ser presumida *ipso facto*, máxime cuando ello a su vez se ve contrastado por el resto de la probanza reunida en autos y las circunstancias que de allí se extraen.

12.- Por lo demás, tampoco escapa del suscripto la circunstancia atinente a que C.E.C. posee contactos en su agenda del celular cuyo código de área se corresponde a la Estado Plurinacional de Bolivia, país que colinda con la provincia de Jujuy y que al menos con uno de ellos, mantiene conversaciones respecto de la entrega de mercadería.

En particular, del informe elaborado por la Unidad Operacional Control Narcotráfico y el Delito Complejo del Este de la Policía de la Seguridad Aeroportuaria respecto del teléfono marca Samsung, modelo Galaxy A12 secuestrado a C.E.C., surge una conversación con el abonado N° ***, correspondiente al contacto "C.B.". En aquella -remarca la fuerza policial actuante- *"...se aprecia un audio recibido por parte del contacto 'C.B.', el cual le pregunta a la sindicada en autos C.E.C., si al día siguiente iba a dirigirse a retirar los pantalones, posteriormente la investigada en autos le responde, que, al día de la fecha, siendo ese el día 09/07/2023, se estaba volviendo en avión y que, al día siguiente, ya iba a ir a retirar los pantalones..."* (cfr. informe de fs. 278/288, incluido en el archivo "Digitalización" obrante a fs. 1/50 del Sistema de Gestión Judicial LEX 100).

Debe resaltarse en este contexto, que del contenido del celular incautado a C.E.C., surge la existencia de un grupo de la ~~aplicación de mensajería instantánea "WhatsApp"~~ denominado





Poder Judicial de la Nación

JUZGADO PENAL ECONOMICO 5

CPE 626/2023

"XXXXXXXXXX", del que se desprenden 1133 mensajes desde septiembre de 2022 hasta el día del secuestro del aparato móvil (9 de julio de 2023). En ellos, los participantes del grupo envían mensajes de aviso o "alertas" de controles policiales en distintos puntos de la ruta que une la provincia de Jujuy con el territorio del Estado Plurinacional de Bolivia. De ello, resultan ilustrativas las capturas que se visualizan a continuación:

wa_contacts, Size: 1130496 bytes)

Forwarded

From: [REDACTED]

Salida de ledesma vial controlando

Priority: Normal

Platform: Mobile

Label: Forwarded, SelfDestruct

8/7/2023 19:43:19(UTC+0)

Source Extraction:

Sistema de archivos (1)

Source Info:

EXTRACTION_FFS.zip\data\media\0\Android\media\com.whatsapp\WhatsApp\Databases\msgstore.db.crypt14\msgstore.db : 0x767189 (Table: message, Size: 47112192 bytes)

EXTRACTION_FFS.zip\data\data\com.whatsapp\databases\wa.db : 0xC8BD1 (Table: wa_contacts, Size: 1130496 bytes)

From: 54[REDACTED]

Nada hasta Palpalá

Priority: Normal

Platform: Mobile

Label: SelfDestruct

9/7/2023 01:51:46(UTC+0)

Source Extraction:

Sistema de archivos (1)

Source Info:

EXTRACTION_FFS.zip\data\data\com.whatsapp\databases\msgstore.db : 0x1C5BAF (Table: message, Size: 104767488 bytes)

EXTRACTION_FFS.zip\data\data\com.whatsapp\databases\wa.db : 0xEB95C (Table: wa_contacts, Size: 1130496 bytes)

From: [REDACTED]

Nada hasta Jujuy por autopista gracias a Dios llegué bien a destino suerte a todos los que continúan en camino, esta vez me tocó venir solitario

Priority: Normal

Platform: Mobile

Label: SelfDestruct

9/7/2023 02:06:30(UTC+0)

Source Extraction:

Sistema de archivos (1)

Source Info:

EXTRACTION_FFS.zip\data\data\com.whatsapp\databases\msgstore.db : 0x6326D9F (Table: message, Size: 104767488 bytes)

EXTRACTION_FFS.zip\data\data\com.whatsapp\databases\wa.db : 0xEB95C (Table: wa_contacts, Size: 1130496 bytes)

From: [REDACTED]

2moto de gn y la ranger en la salida de ledesma ypf... en la moto el gato de velocio ojo

Priority: Normal

Platform: Mobile

Label: SelfDestruct

9/7/2023 19:39:48(UTC+0)

Source Extraction:

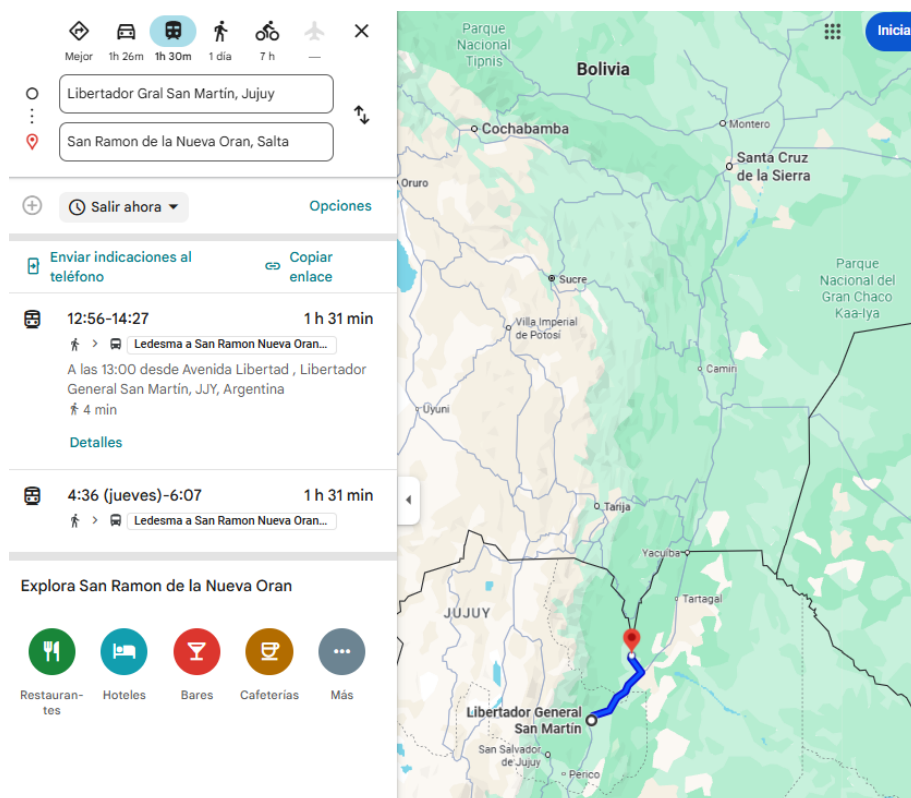
Sistema de archivos (1)

Source Info:

EXTRACTION_FFS.zip\data\data\com.whatsapp\databases\msgstore.db : 0x573A842 (Table: message, Size: 104767488 bytes)

EXTRACTION_FFS.zip\data\data\com.whatsapp\databases\wa.db : 0xD4AC0 (Table: wa_contacts, Size: 1130496 bytes)





(conf. tomas de pantalla del contenido del celular marca Samsung, modelo Galaxy A12, secuestrado a C.E.C. en el procedimiento que diera inicio a estos actuados y extraído por la Policía de Seguridad Aeroportuaria, y del servicio "Google Maps")

Los mensajes precitados permiten defender fácilmente la hipótesis -o al menos no descartarla- acerca de que el dinero con el que se encontró a C.E.C. el día del procedimiento que originara estos actuados, tenía como destino su puesta en circulación en el Estado Plurinacional de Bolivia.

Es por ello que corresponderá extraer testimonios de las presentes actuaciones y remitirlas a la Excma. Cámara Federal de Apelaciones de Salta, con jurisdicción en la provincia de Jujuy, a fin de investigar la posible infracción a alguna de las conductas tipificadas en el Código Aduanero -Ley N° 22.415-, en tanto se vislumbra con claridad que esa precisa infracción resultaría ser el delito precedente que explica el origen de los fondos cuya puesta en circulación se investiga en autos.

13.- En definitiva, a partir de las consideraciones efectuadas anteriormente, se evidencia que C.E.C. no cuenta con capacidad económica-financiera para generar las sumas incautadas.

Es útil destacar que no es necesario que en la presente causa, que tiene por objeto la investigación y acreditación de la supuesta responsabilidad penal de C.E.C. en el delito de lavado de dinero, se investigue el ilícito penal previo del cual provendría aquel dinero, cuyo





Poder Judicial de la Nación

JUZGADO PENAL ECONOMICO 5

CPE 626/2023

origen espurio debe estimarse *prima facie* probado, con el alcance exigido para este momento del proceso.

La circunstancia de tener en su poder las divisas por las sumas mencionadas anteriormente, el modo en el cual se intentó transportar las mismas, la ausencia de elementos que evidencian el origen real de aquellas sumas de dinero y las demás circunstancias corroboradas a su respecto con relación a la actividad comercial alegada -en particular, aquellas que emergen del teléfono celular secuestrado a la encausada-, permiten concluir, con el grado de probabilidad que se requiere para esta etapa del proceso, que las sumas incautadas no tendrían origen lícito.

14.- De este modo, por el examen de los elementos de prueba incorporados a la investigación, se permite concluir que C.E.C. era quien se encontraba en poder de las sumas de un millón setenta y un mil setecientos ochenta pesos argentinos (\$ 1.071.780) y diecisiete mil cincuenta dólares estadounidenses (U\$S 17.050), la cual se encontraba en la forma ya descripta, al momento en el cual la nombrada se disponía a embarcar en el vuelo de la empresa aerocomercial Jet Smart N° WJ 3664, con destino a la ciudad de San Salvador de Jujuy -provincia de Jujuy-, el 9 de julio de 2023, donde pensaba integrarlas al sistema económico y dotarlas de esa manera, de un aparente origen lícito. Las circunstancias mencionadas evidencian que la imputada tuvo bajo su dirección, en todo momento, el dominio de los sucesos hacia una finalidad determinada, lo cual permite concluir que la nombrada ostentó la calidad de autora (artículo 45 del C.P.).

VI.- JUICIO DE TIPICIDAD.

15.- Establecido cuanto precede en orden a la materialidad endilgada y la participación de C.E.C. en aquella, en orden a la calificación legal del hecho corroborado en autos, es útil recordar que el artículo 303 inciso 1° del Código Penal, conforme su texto ordenado según Ley N° 26.683 (B.O. 21 de junio de 2011), que se encontraba vigente al momento del evento pesquisado, establece que “(S)erá reprimido con prisión de tres (3) a diez (10) años y multa de dos (2) a diez (10) veces del monto de la operación, el que convirtiere, transfiriere, administrare, vendiere, gravare, disimulare o de cualquier otro modo pusiere en circulación en el mercado, bienes provenientes de



un ilícito penal, con la consecuencia posible de que el origen de los bienes originarios o los subrogantes adquieran la apariencia de un origen lícito, y siempre que su valor supere la suma de pesos trescientos mil (\$ 300.000), sea en un solo acto o por la reiteración de hechos diversos vinculados entre sí..."

Por su parte, el inciso 3° de dicho artículo establece que "(E)l que recibiere dinero u otros bienes provenientes de un ilícito penal, con el fin de hacerlos aplicar en una operación de las previstas en el inciso 1, que les dé la apariencia posible de un origen lícito, será reprimido con la pena de prisión de seis (6) meses a tres (3) años".

Asimismo, a tenor del planteo efectuado por la defensa, es necesario destacar que tras la modificación introducida por la Ley N° 27.739 (B.O. 15 de marzo de 2024), el inciso 1° del artículo 303 del Código Penal determina que será reprimido con prisión de 3 a 10 años y multa de 2 a 10 veces el monto de la operación "...el que convirtiere, transfiriere, administrare, vendiere, gravare, adquiriere, disimulare o de cualquier otro modo pusiere en circulación en el mercado, bienes u otros activos provenientes de un ilícito penal, con la consecuencia posible de que el origen de los bienes originarios o los subrogantes adquieran la apariencia de un origen lícito, y siempre que su valor supere la suma de ciento cincuenta (150) Salarios mínimos, vitales y móviles al momento de los hechos, sea en un solo acto o por la reiteración de hechos diversos vinculados entre sí".

16.- Fijado cuanto precede, en primer orden cabe mencionar que en el caso de maras se advierte que el monto que detentaba C.E.C. el pasado 9 de julio de 2023 supera ampliamente la cantidad prevista en el tipo penal en su redacción vigente hasta el 14 de marzo de 2024 (cfr. Prevención Sumaria N° 0540AER/2023).

Ahora bien, en atención al planteo introducido por la defensa de C.E.C. en su presentación de fecha 31 de octubre de 2025, cabe referir que no escapa del suscripto que en la especie resultaría *prima facie* más benigna la aplicación de la modificación introducida por la Ley N° 27.739 (B.O. 15 de marzo de 2024), puntualmente al fijar en 150 Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (en adelante, SMVyM) la condición objetiva de punibilidad correspondiente al tipo penal bajo estudio.





Poder Judicial de la Nación

JUZGADO PENAL ECONOMICO 5

CPE 626/2023

Nótese que el texto ordenado según Ley N° 26.683 establecía aquella condición en \$300.000, lo que al momento del hecho equivalía a aproximadamente 3 Salarios Mínimos Vitales y Móviles, dado que según Resolución N° 10/2023 del Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo Vital y Móvil (B.O. 17/07/2023) por entonces aquél ascendía a \$105.500. Por tanto, en las particulares circunstancias del caso, la reforma introducida por la Ley N° 27.739 resulta mas benigna al fijar aquella condición en 150 SMVyM.

17.- Pese a ello, no corresponde adoptar la solución remisorio incoada por la defensa de C.E.C. en la presentación efectuada por su defensa. Ello, toda vez que el código sustantivo no lo prevé de esa manera.

Con respecto a esto último, cabe recordar que el inciso 4° del artículo 303 del Código Penal -t.o según Ley N° 27.739-, establece que *"Si el valor de los bienes no superare la suma indicada en el inciso 1), el autor será reprimido con la pena de multa de cinco (5) a veinte (20) veces del monto de la operación"*.

Frente a ello, cabe resaltar que al momento de resolver la situación de una persona imputada, lo que corresponde hacer al tribunal es estabilizar la imputación al otorgar a quien soporta el proceso la garantía de saber a qué atenerse, pues sólo respecto del hecho por el cual se dicta tiene ya cumplido el paso imprescindible para ir a juicio. Se trata, justamente, de una declaración jurisdiccional de la presunta culpabilidad del imputado como partícipe de un delito verificado concretamente (Clariá Olmedo, Jorge A., *Tratado de Derecho Procesal Penal*, Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 1.ª ed., 2014, Tomo IV, pp. 351-366 y D'Álora, Francisco J., *Código Procesal Penal de la Nación*. 7.ª ed., Buenos Aires, Abeledo-Perrot, 2005, Actualización de Nicolás F. D'Albora).

En esa misma línea, cabe mencionar en cuanto aquí resulta pertinente lo decidido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso "Sircovich, Jorge Oscar y otros s/defraudación por desbaratamiento de derechos acordados" (S. 1798. XXXIX., rta. el 31/10/06), al declarar procedente un recurso extraordinario compartiendo los argumentos del Señor Procurador General, en cuanto allí sostuvo: *"....en lo que respecta al principio de congruencia, sostiene*



que, cualquiera sea la calificación jurídica que en definitiva efectúen los jueces, el hecho que se juzga debe ser exactamente el mismo que el que fue objeto de imputación y debate en el proceso, es decir, aquel sustrato fáctico sobre el cual los actores procesales desplegaron su necesaria actividad acusatoria o defensiva... La fórmula del Tribunal es que 'si bien en orden a la justicia represiva, el deber de los magistrados, cualesquiera que fueren las peticiones de la acusación y la defensa, o las calificaciones que ellas mismas hayan formulado con carácter provisional, consiste en precisar las figuras delictivas que jueguen con plena libertad y exclusiva subordinación a la ley, ese deber encuentra su límite en el ajuste del pronunciamiento a los hechos que constituyen la materia del juicio' (Fallos: 314:333 con cita de Fallos: 186:297; 242:227; 246:357; 284:54; 298:104; 302:328, 482 y 791 315:2969; 319:2959; 320:431, voto de los jueces Moliné O'Connor y López; 321:469 con cita de Fallos: 310:2094 y 312:2370, entre otros ; y 324:2133, voto del juez Petracchi)... En consecuencia, la sentencia impugnada no ha dado cumplimiento a los requisitos constitucionales mencionados precedentemente, lo cual determina su invalidez”.

Se desprende de ello que, si bien la modificación que efectuó la Ley N° 27.739 en el año 2024 respecto de la redacción del artículo 303 del Código Penal -en particular, en el inciso 1° de aquél- redundaba en que en el caso *sub examine* la condición objetiva de punibilidad fijada por el código sustantivo no habría sido superada, para esos casos el inciso 4° de la citada norma prevé expresamente la pena de multa.

Teniendo en cuenta lo establecido en el referido inciso, y que no se trata aquí de analizar la pena que efectivamente se aplicará en la especie -tarea que le corresponde en la ulterior etapa de juicio oral, para la cual ésta instrucción resulta su antesala-, corresponde rechazar la solicitud efectuada por la defensa de C.E.C..

18.- En suma, toda vez que en esta instancia instructoria la mayor benignidad que pueda presentar el texto ordenado por la Ley N° 27.739 no conduce a la adopción del temperamento remisivo reclamado por la defensa de la encausada, corresponde efectuar el juicio de adecuación típica según la ley vigente al momento del hecho, a saber, el artículo 303, inciso 1°, del Código Penal según Ley N° 26.683.-





VII- ASPECTO SUBJETIVO.

19.- Habiéndose determinado la persona que detentó la calidad de autora del delito investigado, corresponde analizar en el caso concreto la verificación del aspecto subjetivo del tipo penal previsto por el artículo 303 del Código Penal.

Cabe recordar que la doctrina ha sostenido que *“el dolo tiene un componente intelectual, esto es, el saber, y otro volitivo, que se refiere, sin lugar a dudas, al tipo objetivo”*, es decir, *“el dolo es conocer, por una parte, el tipo objetivo y, en segundo lugar, la voluntad de realización de aquél”*, por lo que se puede afirmar que *“El autor actúa dolosamente cuando conoce el concreto tipo objetivo, y consecuentemente se dispone a realizar la acción allí descripta”* (Donna, Edgardo Alberto *“Teoría del delito y de la pena”*, Editorial Astrea, Buenos Aires, 1995, Tomo II, páginas 90 y ss.).

Dicho ello, en lo referente al aspecto subjetivo de la intervención de C.E.C. en el hecho que le es endilgado y por el cual fue indagada en el marco de estas actuaciones, se considera que aquélla fue dolosa, toda vez que se verifican elementos de convicción para estimar que la nombrada obró con conocimiento y voluntad de realizar el tipo penal involucrado.

En principio, conforme a las reglas de la sana crítica racional, con arreglo a las exigencias de este momento del proceso, y de acuerdo con las circunstancias del caso, por el hecho de que las sumas incautadas estaban siendo transportadas en forma personal por C.E.C., y que la cantidad secuestrada no es de aquéllas que habitualmente, y por razones de seguridad, es transportada en el modo en que el imputado intentó trasladarla (pues, lo lógico es recurrir a medios más formales y seguros para el traslado de divisas), y la forma en que aquel traslado se pretendió realizar sólo resulta atendible en un contexto relacionado con el origen clandestino del importe en cuestión, en el cual no es posible acudir a las vías de transferencia de divisas formales mediante una bancarización del monto involucrado.

En este extremo, tampoco puede tener favorable acogida la hipótesis alternativa que fuera presentada por la defensa en su descargo -referente al origen y destino del dinero secuestrado- puesto que las ~~reglas de la experiencia común conducen a~~ considerar que si se trataba



de sumas de dinero bancarizadas a nombre de V.C.A. o V.N.A. que estos últimos dieron a C.E.C. a fin de que adquiriera mercadería en la provincia de Jujuy, lo razonable es que aquella sea circulada dentro del mismo sistema bancario, evitándose así el riesgo de su transporte en efectivo y la pérdida de trazabilidad del mismo.

Además, no obra en el expediente probanza alguna que permitiera sostener que el hecho endilgado a C.E.C. en estos actuados, este es, la puesta en circulación de las sumas incautadas con la posible consecuencia de que aquellas adquirieran la apariencia de origen lícito, se hubiere cometido con la insuficiencia o alteración de sus facultades, o bajo un estado de inconsciencia, por los cuales la nombrada no comprendía la criminalidad de su accionar (artículo 34º, inciso 1º, del Código Penal, *contrario sensu*).

VIII. ANTIJURIDICIDAD.

20.- No se registran en el *sub examine* causales de justificación que enerven el juicio de antijuricidad y tampoco se advierte ninguna situación que pudiese calificarse como una legítima defensa, como legítimo ejercicio de un derecho o como un estado de necesidad justificante.

IX. CULPABILIDAD.

21.- En lo que respecta al ámbito de la culpabilidad, el presunto injusto es, en principio, reprochable a C.E.C., puesto que no se ha invocado ni se advierte de los elementos obrantes en la causa, de momento, circunstancias que permitan estimar la posible existencia de algún supuesto de inimputabilidad por incapacidad psíquica, error o estado de necesidad exculpante.

X. CONCLUSIÓN.

22.- En función de lo hasta aquí expresado, en base a las constancias reunidas en el sumario y con el grado de certeza que se requiere en esta etapa del proceso penal, se encuentran reunidos elementos de convicción suficientes para estimar que el delito investigado en autos ha sido cometido mediando la intervención de C.E.C., en calidad de autora, por lo cual corresponde dictar el auto de procesamiento de la nombrada, en los términos del artículo 306 del Código Procesal Penal de la Nación.





Poder Judicial de la Nación

JUZGADO PENAL ECONOMICO 5

CPE 626/2023

Al mismo tiempo, resulta oportuno recordar que la Excm. Cámara del fuero reiteradamente ha dicho que *“...Para el dictado del auto de procesamiento se requieren elementos de prueba por los cuales, al menos, se permita comprobar la existencia de un estado de probabilidad con respecto a la comisión del delito investigado, y a la participación culpable del indagado en aquel hecho...”* (confr. Sala “B” Regs. Nos. 553/99, 1125/04, y 407/05, entre muchos otros).

A su vez, prestigiosa doctrina sostiene que *“...la fundamentación del auto de procesamiento, aunque imprescindible, sólo supone una estimación de la responsabilidad del imputado que no requiere más sustanciación que haberlo escuchado y evacuado brevemente las citas útiles que hubiera hecho (arts. 294, 304 y 306 del mismo código). Esta estimación no es definitiva ni vinculante...”* (confr. Reg. N° 566/97, entre muchos otros de la Sala “A”) y que: *“Los códigos argentinos... requieren para dictar la resolución de mérito (procesamiento) ‘que hubiere elementos de convicción suficientes para estimar que existe un hecho delictuoso y que aquél es culpable como participe de éste’...aluden indudablemente a la probabilidad positiva, como fundamento de la decisión a la que hace referencia, esto es, a la necesidad de que el juez que emite la decisión funde la culpabilidad del imputado como participe en un hecho punible, con el grado de probabilidad...”* (confr. MAIER, Julio B.J. “Derecho Procesal Penal”, Editores del Puerto, Buenos Aires, año 1999, 2ª Edición, pág. 846/847).

XI. PRISIÓN PREVENTIVA.

23.- Conforme lo expuesto, habrá de decretarse el procesamiento de la imputada C.E.C., por lo que corresponde expedirse sobre la procedencia de aplicar la prisión preventiva respecto de los nombrados.

Dicho ello, cabe destacar que, conforme las constancias de autos, no se verifican los supuestos que se establecen por el artículo 312 del Código Procesal Penal de la Nación, para disponer la medida de aseguramiento personal respecto de la imputada ni se advierten elementos que permitan sospechar que aquella intentará entorpecer el avance de la investigación, o eludir la acción de la justicia, por estas razones, corresponde que continúe el proceso en libertad (artículo 310 del Código Procesal Penal de la Nación).



Sin perjuicio de lo expuesto anteriormente, dado el avance que implica para el sumario el dictado de la presente resolución de mérito, y de conformidad con el artículo 310 del Código Procesal Penal de la Nación, corresponde disponer la prohibición de salida del país de C.E.C..

XII. EMBARGO.

24.- Respecto al fundamento del embargo que habré de trabar, por el artículo 518 del Código Procesal Penal de la Nación se dispone “[a]l dictar el auto de procesamiento, el juez ordenará el embargo de bienes del imputado o, en su caso, del civilmente demandado, en cantidad suficiente para **garantizar la pena pecuniaria, la indemnización civil y las costas**” (el resaltado no corresponde al original).

Por su parte, el artículo 533 del Código Procesal Penal de la Nación establece que las costas consistirán: “1º) *En el pago de la tasa de justicia.* 2º) *En los honorarios devengados por los abogados, procuradores y peritos.* 3º) *En los demás gastos que se hubieren originado por la tramitación de la causa*”.

Si bien en esta etapa del proceso no resulta posible precisar el monto de los rubros que integran las costas, procede efectuar una estimación de aquéllos a fin de garantizar su futuro cumplimiento (C.N.A.P.E., Sala “B”, Reg. 387/2004).

Por todo lo expuesto, a los fines de garantizar las obligaciones pecuniarias emergentes del eventual dictado de una sentencia condenatoria contra los imputados, se tendrán en cuenta la naturaleza económica del delito investigado, la posible aplicación de la pena de multa prevista por el artículo 22 *bis* del Código Penal y los demás gastos producto de la tramitación de las presentes actuaciones. Siendo ello así, se advierte la procedencia de ordenar el embargo sobre los bienes de la imputada, hasta cubrir la suma de **treinta millones de pesos (\$ 30.000.000)**.

Por lo expresado, **SE RESUELVE:**

I.- DECRETAR EL PROCESAMIENTO de C.E.C. (Documento Nacional de Identidad N° ***) cuyas demás condiciones personales fueron consignadas al inicio de la presente, por considerarlo





Poder Judicial de la Nación

JUZGADO PENAL ECONOMICO 5

CPE 626/2023

prima facie autora penalmente responsable (artículo 45 del Código Penal) del delito previsto por el artículo 303 inciso 1º) del Código Penal -t.o. según Ley N° 26.683-, relativo a la puesta en circulación en el mercado bienes provenientes de un ilícito penal, en concreto y cuanto menos, la suma de un millón setenta y un mil setecientos ochenta pesos argentinos (\$ 1.071.780) y diecisiete mil cincuenta dólares estadounidenses (U\$S 17.050) -artículos 306 y 310 del Código Procesal Penal de la Nación-.

II.- DISPONER EL EMBARGO SOBRE LOS BIENES de C.E.C. hasta cubrir la suma de **treinta millones de pesos (\$ 30.000.000)** -artículo 518 del Código Procesal Penal de la Nación-. A tal fin, deberá formarse el incidente respectivo.

III.- DISPONER LA PROHIBICIÓN DE SALIDA DEL PAÍS con relación a C.E.C. (artículo 310 del Código Procesal Penal de la Nación). A tal fin, líbrense oficios a la Policía de Seguridad Aeroportuaria y a la Dirección Nacional de Migraciones.

IV.- REQUERIR a la delegación de la Policía Federal que corresponda que, en el plazo de diez días, realice un amplio informe socio ambiental respecto de C.E.C.. A tal fin, líbrense télex.

V.- EXTRAER TESTIMONIOS y REMITIR los mismos a la Excma. Cámara Federal de Apelaciones de Salta, en los términos expuestos en el considerando 12.

Protocolícese, notifíquese mediante cédula electrónica a las partes y comuníquese a la Dirección de Comunicación y Gobierno Abierto de la CSJN (Acordada 10/2025).

Firme que sea, comuníquense al Registro Nacional de Reincidencia.

DIEGO ALEJANDRO AMARANTE

JUEZ

Ante mí:

MANUEL LAIÑO DONDIZ

SECRETARIO DE JUZGADO

Fecha de firma: 18/12/2025

Alta en sistema: 05/02/2026

Firmado por: MANUEL LAIÑO DONDIZ, SECRETARIO

Firmado por: DIEGO ALEJANDRO AMARANTE, JUEZ



#38042669#461575283#20251218094817896

